

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Exp. 015-2017-00748-02

Cumplido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por CARLOS ARTURO RUIZ CÁRDENAS, frente al auto que aprobó la liquidación de costas, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó en contra de PROTECCIÓN S.A. Trámite al que se vinculó como interviniente en exclusión a MARÍA INÉS ZAPATA COSME.

ANTECEDENTES:

Como las pretensiones del actor no salieron adelante, en la sentencia de primera instancia se impusieron a aquél las costas, fijándose las agencias en derecho a su cargo en \$781.242; y como su recurso de apelación en contra de aquella no prosperó, en la de segunda instancia igualmente se le impusieron costas con agencias equivalentes a \$100.000 (fls 221 y 243). Luego, se aprobó la liquidación de las costas al tenor del artículo 366 del CGP, en \$881.242 (fl 253). Disidente con este monto, el promotor del proceso, interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación (véase fls. 254/255). Negado el primero por estimarse que los reparos formulados son improcedentes (fl. 257), fue

concedido el segundo, siendo esta la razón por la cual conoce del asunto esta Judicatura.

La censura busca que el monto de las agencias en derecho se disminuya o elimine, porque *“en cuanto a la absolución de las pretensiones incoadas, el cálculo de las costas procesales no puede ser desproporcionada (sic), pues esta liquidación debe ser guiada por distintos criterios como la condición social y económica del actor, el cual es una persona que durante un largo esfuerzo laboral, NO alcanzó a serle reconocidas las prestaciones demandadas, ingreso con el cual se permitiría garantizar su mínimo vital y móvil, el cual se vio sumamente afectado, en caso de imponer en su contra una obligación como la que se recurre”*. A ese efecto, citó los artículos 3 y 6 del Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Según el numeral 4º del artículo 366 del CGP *“...Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o éste y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”*.

Dicha Corporación, en un primer momento fijó las tarifas mediante el Acuerdo N° 1887 del 26 de junio de 2003, sin embargo, tal fue modificado mediante el

Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, que según su artículo 7º, debe regir para los procesos iniciados a partir de esa fecha, como el presente, cuya demanda se presentó el 8 de septiembre de 2017 (fl 7).

Conforme al acuerdo aplicable al caso, para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, **dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas**, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, **sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites** (art 2). Límites que se establecieron en el artículo 5º para los proceso declarativos: i) en primera instancia entre 1 y 10 SMLMV, y ii) en segunda instancia entre 1 y 6 SMLMV.

Vistas así las cosas, son infundados los argumentos de la apelación pues aparte de basarse en un acuerdo que no tiene vigencia, cuando las agencias en derecho se liquidaron por el juzgado en un total para ambas instancias de \$881.242, se mantuvo dicha orden en el límite mínimo establecido por el Consejo Superior de la Judicatura, por consiguiente ninguna modificación procede al auto cuestionado.

Los presupuestos fácticos expuestos en la alzada, relativos a la situación económica del polo activo, debieron valorarse previamente por esta parte, contando con la posibilidad de solicitar el amparo de pobreza previsto en los artículos 151 y siguientes del CGP, que de haberse concedido hubiese impedido la condena en costas, pero así no acaeció.

En consecuencia de estas breves pero precisas consideraciones y sin lugar a otras argumentaciones, se confirmará el auto recurrido. Sin costas en esta instancia.


DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, CONFIRMA el auto objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

Sin costas en esta instancia.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 70 fijados el 27 de abril de 2021
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.